



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, agosto 3 de 2022

Radicado: 05001 31 05-017-2018-00565-01  
Demandante: LIGIA VALENCIA LLANO  
Demandado: PORVENIR S.A.  
Integrada: NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA  
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA.  
Asunto: APELACIÓN  
Tema: GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA.

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

**ANTECEDENTES**

La demandante solicitó se declarara que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en la modalidad de garantía de pensión mínima y en consecuencia se condene a PORVENIR a reconocer y pagar pensión de vejez en forma retroactiva desde que acreditó el cumplimiento de los requisitos mínimos y los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

Para respaldar sus pretensiones, dijo que nació el 31 de marzo de 1948, laboró al servicio de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, desde el 3 de noviembre de 1984 y hasta el 4 de mayo de 1985, acreditándose 26,14 emana cotizadas en CAJANAL. Que se afilió por primera vez al régimen de prima media el 27 de agosto de 1987 y hasta el 30 de junio de 1998, en donde alcanzó a cotizar 533,86 semanas, y posteriormente se trasladó a PORVENIR S.A. en donde realizó aportes hasta mayo de 2015 alcanzando a cotizar en este fondo un total de 706 semanas, en ese sentido, indicó que alcanzó a cotizar durante toda su vida laboral 1.266 semanas cumpliendo con ello el requisito de semanas mínimas para la pensión que reclama.

Adujo que el 25 de septiembre de 2014 solicitó ante PORVENIR S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y hasta la fecha de presentación de la demanda tenía suspendido el reconocimiento pensional en razón de inconsistencias en la historia laboral con relación al tiempo laborado para la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, pues según la historia laboral expedida por la AFP solo se reflejan 1128 semanas, omitiéndose el tiempo que laboró para la ESE Hospital de la Estrella entre el 1 de agosto de 1995 y el 30 de junio de 1998.

Dijo que el tiempo laborado en la ESE Hospital de la Estrella entre el 1 de agosto de 1995 y 30 de junio de 1998, no es valorado por PORVENIR, argumentando que “el archivo masivo del ISS reporta como días trabajados 0 para historial laboral”, y, sin embargo, la historial laboral emitida por COLPENSIONES refleja 137,57 semanas cotizadas con la entidad. Respecto del tiempo laborado con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, la AFP le indicó que “el bono no es emitible, la entidad no está asumida por la nación o existen periodos no asumidos por la nación”.

Señaló que el 27 de febrero de 201 PROTECCIÓN requirió a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a fin de que expidiera certificado de información laboral con destino a la emisión del bono pensional tipo A de la demandante, y el 17 de marzo de 2015 el fondo nuevamente requiere a Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para que corrija la certificación con respecto del nombre y nit de la

empresa empleadora, luego el fondo requiere a la entidad por tercera vez el 20 de abril de 2016 para que modifique la certificación laboral e indique que quien asume el tiempo laborado de la demandante es la misma entidad y no la nación, pues no se encontró en los archivos de CAJANAL soporte de pago efectuados por los periodos laborados por la entidad para esa entidad.

Indicó que la AFP requirió el 20 de abril de 2015 a COLPENSIONES a fin de que valide y corrija la historia laboral de la demandante, sin que lo hubiese hecho a la fecha de radicación de la demanda.

Apuntó que el 23 de junio de 2015 presentó derecho de petición ante la AFP solicitando información respecto del reconocimiento de la prestación, la entidad a través de comunicado del 2 de julio de 2015 le informó que su cuenta de ahorro individual no contaba con fondos suficientes para financiar una pensión y no pudo acceder la garantía de pensión mínima por problemas con la emisión del bono pensional de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.

El *A quo* después de indicar que la demandante reúne ampliamente los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima, pues incluso sin tener en cuenta los tiempos laborados para la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA, acredita más de 1150 semanas, ordenó a PORVENIR realizar el pago de la garantía de pensión mínima a la demandante desde el 19 de abril de 2018 con 13 mesadas anuales, autorizó los descuentos en salud, condenó en intereses moratorios hasta que acredite el pago, condenó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA a asumir con sus propios recursos el periodo laborado por la demandante entre el 3 de noviembre de 1984 y el 4 de mayo de 1985, corrigiendo las certificaciones para bono pensional y al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a expedir acto administrativo correspondiente al reconocimiento de la garantía de pensión mínima a la demandante, advirtiendo que una vez agotados los recursos de la cuenta de ahorro individual.

Decisión que fue objeto de recurso por la **parte demandante** indicando que sólo apela lo referente a la fecha desde la cual se reconoce la prestación reclamada, pues el despacho tiene como fecha de exigibilidad un comunicado de PORVENIR en donde se niega la posibilidad de acceder a la prestación pero se reconocen las semanas mínimas que exige la norma. Dijo que su representada efectuó aportes hasta el mes de mayo del año 2015, fecha para la cual ya había solicitado la entrega de pensión de vejez, fecha desde la cual se encuentra esperando el reconocimiento de la prestación. Dijo que la prestación debe ser reconocida desde la fecha que reunió los requisitos mínimos para acceder a la prestación. Considera que es clara la existencia de semanas de la historia laboral de la demandante, pues sólo en cumplimiento de la acción de tutela la demandada reconoció.

Respecto de los intereses moratorios, destaca que el Despacho para reconocer la prestación solicitada, indica que no era necesario que la demandante acreditara los ingresos mensuales, sin embargo, para atar el reconocimiento de los intereses moratorios a la fecha de la sentencia de primera instancia, indica que la demandante al momento de presentar solicitud de la prestación no acreditó los ingresos que eran exigible en su momento. En ese sentido, solicitó modificar la fecha desde la cual se debe reconocer el retroactivo pensional, así como los intereses moratorios.

**La apoderada del Ministerio de Hacienda** dijo que para evaluar el reconocimiento de una garantía de pensión mínima no solamente es necesario validar el cumplimiento de la edad, sino además determinar con plena certeza mediante un cálculo actuarial el capital reunido que se espera reunir en la cuenta de ahorro individual de la demandante, y determinar que el mismo no es suficiente para financiar una pensión en los términos del artículo 64 de la ley 100 de 1993, es decir, que la misma no pueda ser financiada con el saldo de la cuenta de ahorro individual, para validar ello se requiere determinar el saldo de la cuenta individual. Respecto al bono pensional de la demandante, el estado es de liquidación provisional, situación que de conformidad con el decreto 1748 de 1995 no genera ninguna situación consolidada, ello por cuanto no ha sido aceptada por el empleador ni certificada, y es por ello que la misma no puede exponerse como prueba para un eventual derecho

prestacional toda vez que la misma puede variar, y por ellos se requiere entonces que el estado del bono sea al menos “emitido”.

Dijo que con respecto a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, el ministerio de hacienda no puede entrar a validar los periodos laborados para dicha entidad, ya sea que los mismos sean asumidos por la UNIDAD ADMINISTRATIVA, puesto que, esos son tiempos laborados, más no tiempos cotizados, por lo que la obligación del empleador no es reconocerlo a través de bono pensional, sino a través de cálculo actuarial. Que la corrección de historia laboral para bono no le corresponde al Ministerio De Hacienda, sino a los fondos, y lo único que hace el Ministerio de Hacienda es compensar el archivo laboral remitido con la información que para el efecto ingresa en el sistema interactivo. Se debe tener en cuenta que respecto de la garantía de pensión mínima, la nación solo emite un acto administrativo de aceptación en la contribución y financiación del mismo, que implica que el ministerio de hacienda tenga a su cargo la transferencia de recursos para el financiamiento una vez se agoten los recursos propios de la cuenta de ahorro individual. En ese sentido, solicita sea absuelta su representada.

**La apoderada de PORVENIR** solicitó que la garantía de pensión mínima sea reconocida a partir de la ejecutoria de la sentencia de primera instancia, ya que, sólo a partir de la misma es que la entidad puede determinar que la demandante si cumplía con los requisitos para acceder a la prestación, y si bien el 19 de abril de 2018 la entidad le indicó que tenía el número de semanas, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima sólo se pueden hacer hasta el momento en que la demandante acepte su historia laboral, lo cual no ha ocurrido y posteriormente a la aceptación de la historia laboral se da la emisión y pago de bono pensional y una vez realizados los cálculos y determinado que no tiene capital suficiente para financiar la pensión se procedería a la solicitud de garantía de pensión mínima; pero como nada de eso ha ocurrido, pues existían unos errores dentro de la historia laboral para bono pensional de la demandante, que no permitían su admisión y pago.

Solicitó sea revocada la condena de intereses moratorios de su representada, ya que, la entidad sólo puede entrar a reconocer la prestación una vez la demandante acepte la historia laboral para bono pensional, situación que no ha ocurrido, y en ese sentido no es posible constituir en mora a PORVENIR. Finalmente, solicitó absolver de las costas impuestas, comoquiera que su representada no podía hacer nada para reconocer los derechos que fueron reconocidos a través de sentencia judicial.

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, la apoderada de PORVENIR solicitó sea revocada la decisión de primera instancia, destacando que la demandante no cumple con los requisitos para que el fondo le reconozca la prestación solicitada, por cuanto no cuenta con el dinero suficiente para financiar una pensión del 110% mensual. Respecto de la garantía de pensión mínima, dijo que no es la competente para reconocerla, pues es el MINISTERIO DE HACIENDA el encargado de dicho reconocimiento, de conformidad con el Decreto 832 de 1995.

Argumentó que el fondo es un mero intermediario entre la OBP y el afiliado y solo puede iniciar el trámite de la garantía de pensión mínima cuando se cumple con todos los requisitos, y teniendo en cuenta las inconsistencias del bono no era posible indicar con el trámite. Que requirió en varias oportunidades a las entidades a fin de normalizar la historia laboral para bono pensional y no fue posible obtener un resultado favorable.

Solicitó que en caso de confirmar la sentencia de primera instancia, se modifique la fecha de exigibilidad de la pensión, estableciéndola desde la emisión del fallo, pues considera que solo hasta esa fecha se dirimió el objeto de la litis.

Pidió sean revocados los intereses moratorios a los que fue condenado, pues la entidad que representa ha actuado conforme a derecho y guiada por el principio de buena fe, además no es procedente la condena en costas, ya que la AFP es una

mera intermediaria y no depende de ella el reconocimiento o no de la garantía de pensión mínima.

La apoderada de la demandante quien solicitó se modifique la fecha de reconocimiento del retroactivo pensiona e intereses moratorios, indicando que está plenamente probado que la demandante dejó de cotizar en mayo de 2015 y el 23 de julio de 2015 presentó solicitud de la prestación que se reclama, razón por la cual considera, es desde esa data que se debe reconocer la prestación. Respecto de los intereses moratorios, el A quo se basa para fijarlos al momento del fallo, señalando que la demandante no acreditó el requisito del artículo 84 de la ley 100 de 1993, que fue exigible hasta el 1 de mayo de 2019, sin embargo, considera que, comoquiera que la entidad nunca requirió a la demandante para cumplir con ese requisito, ahora no se le puede negar los intereses de mora en razón de eso que nunca se le pidió subsanara.

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero indicar que no es tema de discusión, pues se encuentra plenamente probado que **1)** que la demandante nació el 31 de marzo de 1948 (fl.19). **2)** que trabajó como bacterióloga para el servicio seccional de salud de Arauca, entre el 3 de noviembre y el 4 de mayo de 1985 (fl. 21 a 24). **3)** que cotizó en COLPENSIONES desde el 27 de agosto de 1987 y hasta el 30 de junio de 1998, acumulando un total de 533,86 semanas (fl. 24). **4)** que se trasladó al RAIS el 16 de junio de 1998 (fl.27). **5)** que de la historia labora para bono pensional emitida por EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO de los periodos cotizados a COLPENSIONES, en donde se reflejan inconsistencia con los empleadores HOSPITAL LA ESTRELLA, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA (fl.32 a 34). **5)** historial laboral de PORVENIR en donde se refleja que la demandante cotizó 706 semanas para la AFP y solo reconoce 422 cotizadas en COLPENSIONES (fl.35 a 54). **6)** solicitud de prestaciones económicas elevada por la demandante ante PORVENIR S.A. del 25 de septiembre de 2014. **7)** Historia labora para bono pensional aportado

por PORVENIR, (fl.172 a 174). **8)** que PORVENIR radicó derecho de petición ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA el 29 de junio de 2012, solicitando se certificara el tiempo laborado por la demandante, con cargo (fl.214 y 215). **9)** PORVENIR solicitó ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA certificación para bono pensional el 3 de enero de 2013 (fl.217). presentó nuevamente derecho de petición, corrección de error arrojado por el Ministerio de Hacienda (fl.223 y 224). Solicitó nuevamente corrección de certificación el 25 de noviembre de 2014 y certificación para bono pensional el 27 de febrero de 2015 (fl.258).

En ese orden de ideas, en esta instancia se discute si la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague garantía de pensión mínima desde el 1 de junio de 2015, fecha en que dejó de hacer cotizaciones a pensión, si tiene derecho a que se le reconozca y pague intereses moratorios, así mismo se estudiará si el Ministerio de Hacienda debe emitir bono pensional en razón del periodo laborado por la demandante con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, y si es posible exonerar de costas a la demandada.

### **GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA.**

El artículo 65 de la ley 100 de 1991 establece cómo requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima que la afiliada mujer cumpla la edad mínima de 57 años de edad, no haya alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil cientos cincuenta (1.150). Ahora, aun cuando la demandada PORVENIR y el MINISTERIO DE HACIENDA insisten que para el presente caso no es posible reconocer la garantía de pensión mínima, ya que, en primera instancia se requiere que el fondo realice un cálculo con el capital acumulado de la demandante para verificar si es posible que acceda a una de las modalidades de pensión del artículo 35 de la ley 100 de 1993, lo cierto, es que no se requiere realizar o poner a esperar a la demandante más trámites administrativos cuando salta a la vista que con el capital ahorrado por la demandante en su cuenta de ahorro individual \$33.799.255 para el año 2017 y el bono estimado



en \$18.655.123, no alcanzan a financiar una pensión del 110% conforme lo exige la norma, situación que no varía con el pago del bono pensional que no se ha definido por los periodos laborados para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA que se refiere a escasamente 6 meses.

En ese sentido, no se puede ver dilatado y frustrado el derecho pensional de la demandante y menos, suspendida la decisión judicial por un cálculo que para esta Sala, es claro que no tiene mayor relevancia.

Respecto de la edad, se tiene acreditado que la demandante nació el 31 de marzo de 1948, razón por la cual el requisito de la edad la cumple desde el año 2005.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la densidad de semanas mínimas requeridas, que para este caso son 1150 semanas, esta sala considera que está plenamente probado este requisito, pues con la historia laboral de Colpensiones se logra acreditar que cotizó una densidad de 533,86 semanas en el RPM entre el 27 de agosto de 1987 y 30 de junio de 1998 (fl.24) y cotizó en el RAIS 706 semanas (fl.35) sin que sea determinante que el fondo solo tenga en cuenta 422 cotizadas en el RPM, pues es una dificultad administrativa que los fondos deben solucionar y no trasladar la carga a la afiliada, máxime que la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, ha indicado que las historias laborales que expiden los fondos son vinculantes para ellos, por lo que no es posible que se desconozca entonces las semanas que acredita COLPENSIONES con aportes de la demandante.

Con ello, se tiene entonces que la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la garantía de pensión mínima que reclama.

### **ESTATUS O CAUSACIÓN LA PENSIÓN EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL.**

La H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, sentencia SL1168-del 3 de abril de 2019, M.P. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO, ha manifestado

frente a las modalidades de retiro programado y renta vitalicia reconocidas por el Régimen De Ahorro Individual Con Solidaridad, no es posible reconocer una fecha de estatus y causación, teniendo en cuenta que no es posible establecer un criterio objetivo para dicho reconocimiento, pues en cada caso depende de lo que el afiliado decida frente a su mesada pensional, la negociación del bono pensional. Pues así lo establece el artículo 12 del Decreto 1889 de 1994 dispone que «... *Para los efectos del literal a) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, se entiende que el afiliado cumplió los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez cuando efectivamente se pensione por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993.*»

Sin embargo, ha dicho que este criterio no es equiparable en la pensión que se reconoce bajo la garantía de pensión mínima, toda vez que, en esta modalidad, si existe un criterio objetivo, ya que, al igual que en el régimen de prima media se establece una edad mínima y un mínimo de semanas cotizadas.

En palabras de la corte (SL1168-del 3 de abril de 2019)

*Siguiendo los anteriores derroteros, teniendo la pensión de vejez del RPM una fecha de causación y disfrute cierta, es normal hablar de la figura del retroactivo pensional, pues el reconocimiento de la prestación, así como cualquiera de sus posteriores reajustes debe, por principio, proyectarse hacia atrás, de manera que se garantice al pensionado la satisfacción íntegra de su derecho desde cuando efectivamente la ley lo autoriza a ello, con independencia del tiempo que transcurra desde dicho momento y hasta cuando la entidad de seguridad social resuelva. (Ver CSJ SL, 24 mar. 2000, rad. 13425, reiterada en CSJ SL, 13 abr. 2004, rad. 21966; CSJ SL, 19 jul. 2011, rad. 38375; CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 41754).*

De conformidad con lo anterior, para esta Sala es claro que la fecha de disfrute de la garantía de la pensión mínima ocurre cuando el afiliado acredita los requisitos mínimos para acceder a la prestación, es decir, edad y semanas que exige la norma, y no contar con el capital suficiente para financiar su propia pensión. Situación que no puede estar sujeta al pago del bono pensional por parte del Ministerio de Hacienda, pues de aceptarse dicha condición a ninguna mujer se le podría reconocer

la pensión antes de los 60 años, comoquiera que esa es la fecha en la que se puede redimir el mismo. En ese sentido, es claro que, el reconocimiento de la prestación no está sujeta al trámite administrativo interno que deban realizar las entidades con respecto a la redención del bono, siendo si, la única carga del afiliado acreditar el tiempo laborado, carga con el que la demandante cumplió con creces, pues no solo realizó las solicitudes necesarias, sino que además recurrió a la acción constitucional con el fin de aclarar su situación.

De conformidad con lo anterior, se modificará la fecha desde que se hizo exigible la garantía de pensión mínima, estableciéndose el 1 de junio de 2015, fecha en la que dejó de cotizar la demandante y desde la cual tenía derecho a su mesada pensional.

En ese sentido, el retroactivo a reconocer por parte de PORVENIR S.A. se liquida en las siguientes condiciones:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	6,77%	7	\$ 644.350	\$ 4.510.450
2016	5,75%	13	\$ 689.454	\$ 8.962.902
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022		6	\$ 1.000.000	\$ 6.000.000
			TOTAL	\$ 73.207.604

A partir del 1º de julio de 2022 PORVENIR seguirá reconociendo una mesada pensional en cuantía del 1SMMLV que para este año equivale a \$1.000.000, sin perjuicio de los incrementos anuales que establezca el gobierno nacional, autorizando los descuentos en salud. Prestación que se reconoce con 13 mesadas.

**INTERESES MORATORIOS.**

Ahora, frente a los intereses moratorios reclamados, se encuentran contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que debe concordarse con el Art. 9 de la ley

797 de 2003, el cual indica que los fondos encargados reconocerán la pensión de vejez en un tiempo no superior a 4 meses después de radicada la solicitud por el peticionario, siempre y cuando este haya acreditado el cumplimiento de los requisitos para pensionarse. Intereses que jurisprudencialmente se les ha dado trato resarcitorios que no indemnizatorios (SL14528- 2014), es decir, no se requiere que la entidad hubiese actuado de mala fe para que los mismos sean procedentes, pues los mismos se causan por la tardanza en el reconocimiento de cada mesada.

De conformidad con lo anterior, esta Sala considera que si bien es cierto la demandante tiene derecho a que se le reconozca la prestación desde que dejó de realizar las cotizaciones, no puede pasarse por alto que para esa época, tal y como lo advirtió la jueza de primera instancia, los afiliados debían acreditar además no tener rentas superiores al salario mínimo, situación que la demandante al momento de radicar su solicitud no presento.

Valga la pena aclarar, que aunque para esta fecha no se exige y el derecho se reconoce sin siquiera entrar en esas consideraciones, para esa época si era un requisito que se debía acreditar, por lo tanto, si la demandante no aportó la totalidad de requisitos necesarios para reconocer la prestación no es posible constituir en mora a la demandada desde que presentó la solicitud de prestación, ello aun cuando el apoderado insista en que nunca se le requirió para aportar dicha prueba, pues es claro que en nuestro ordenamiento, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades.

En ese sentido, se confirmará la decisión frente a este aspecto, ordenando los intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia.

### **BONO PENSIONAL.**

De conformidad con el Decreto 1299 de 1994

**Artículo 2º.- Requisitos para el reconocimiento del bono pensional por traslado al régimen de ahorro individual.** Los afiliados al sistema general de pensiones, que seleccionen el régimen de ahorro individual con solidaridad, para efectos del reconocimiento del bono pensional, deberán acreditar alguno de los siguientes requisitos:

- a) Que estén cotizando o hubieren efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos del sector público;
- b) Que estén prestando servicios o hubieren prestado servicios al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos del orden nacional, departamental, municipal o distrital, con vinculación contractual o legal y reglamentaria;
- c) Que estén prestando servicios mediante contrato de trabajo con empleadores del sector privado que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, siempre que la vinculación laboral se encontrare vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993 o se hubiere iniciado con posterioridad a la misma fecha, y
- d) Que estén afiliados o hubieren estado afiliados a cajas de previsión del sector privado que tuvieran a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones legales.

**Parágrafo 1º.-** Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas continuas o discontinuas, no tendrán derecho a bono.

Para efecto de contabilizar las semanas previstas en el presente parágrafo se tendrá en cuenta, la suma del tiempo durante el cual el trabajador estuvo cotizando al ISS, a alguna caja o fondo de previsión del sector público, **prestando servicios como servidor público**, vinculado mediante contrato de trabajo a una empresa o empleador del sector privado que tenía a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, o afiliado a una caja o fondo de previsión del sector privado.

**Parágrafo 2º.-** No tendrán derecho a bono pensional las personas que cumplan alguno de los requisitos de que trata el presente artículo y hayan recibido o reclamado indemnización sustitutiva.

**Artículo 3º.- Valor del bono pensional.** El valor base del bono pensional se determinará calculando un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro, durante el período que estuvo cotizando o **prestando servicios**, hasta el momento del traslado al régimen de ahorro individual, para que a este ritmo hubiera completado a los 62 años si son hombres o 60 años si son mujeres, el capital necesario para financiar una pensión de vejez y de sobrevivientes, por un monto igual a la pensión de vejez de referencia del afiliado de que trata el artículo siguiente.

El bono pensional será expedido por su valor base, actualizado con la tasa de interés equivalente al DTF pensional definido en el artículo 10 del presente decreto, desde la fecha del traslado, hasta la fecha de su expedición.

En todo caso, el valor base del bono no podrá ser inferior a las sumas aportadas con anterioridad a la fecha en la cual la persona se traslade al régimen de ahorro individual.

**Parágrafo.-** Para efectos de lo previsto en el inciso 1 de este artículo se entiende por período de cotización **o de prestación servicios**, la suma del tiempo durante el cual el afiliado estuvo cotizando al ISS, a alguna caja o fondo de previsión del sector público, **prestando servicios como servidor público**, vinculado mediante contrato de trabajo a una empresa o empleador del sector privado que tenía a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, o afiliado a una caja o fondo de previsión del sector privado.

*El tiempo de servicios prestado a empleadores del sector privado que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones con anterioridad a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, por trabajadores que en la citada fecha ya no se encontraban vinculados con el respectivo empleador, no será computable para el cálculo del bono pensional.*

De lo anterior, destáquese las líneas que esta Sala resalta con subrayas y negrillas, de las cuales se puede advertir que, para la emisión del bono pensional no solo se requiere que las entidades de carácter público hubiesen hecho cotizaciones, como lo afirma el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, sino también en aquellos casos en los que se prestó el servicio como servidos público, sin que sea un requisito adicional demostrar las cotizaciones, pues es el mismo MINISTERIO DE HACIENDA cuando emite el bono quien indica cuáles son las entidades que son cuotapartista en el mismo.

En ese sentido, se confirmará la decisión de primera instancia, sobre la obligación de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA, de emitir el bono pensional, teniendo en cuenta el tiempo de servicios prestado por la demandante para la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR y la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, fijándose en 1SMMLV a cargo de cada una de ellas y en favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, CONFIRMA, la sentencia de primera instancia, modificando y actualizando el retroactivo, en el sentido de indicar que el mismo se calcula desde el 1 de junio de 2015 y el 30 de junio de 2022.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

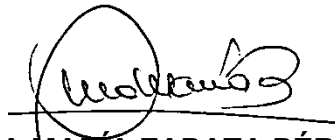
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

<b>Radicado:</b>	05001 31 05-017-2018-00565-01
<b>Demandante:</b>	LIGIA VALENCIA LLANO
<b>Demandado:</b>	PORVENIR, COLPENSIONES, NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
<b>Decisión</b>	CONFIRMA, MODIFICA
<b>Magistrado ponente</b>	DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 8 de agosto de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
**SECRETARIO**